

## TEMA 19. LEY 9/2007, DEL 13 DE JUNIO, DE SUBVENCIONES DE GALICIA: DISPOSICIONES COMUNES A LAS SUBVENCIONES PÚBLICAS. PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN Y GESTIÓN DE LAS SUBVENCIONES PÚBLICAS.

### 1. LA LEY DE SUBVENCIONES DE GALICIA

La regulación básica estatal debe dejar un margen para que cada Comunidad Autónoma la desarrolle y ajuste a las peculiaridades de la organización de su Administración y sus mecanismos de financiación. Las subvenciones son un instrumento fundamental para la actividad de fomento y la consecución de los objetivos de la política social y económica, ya que dispone la vinculación de los recursos públicos a estas medidas. Esto hace que la normativa incida en otro ámbito de autonomía como es el financiero, debiendo establecerse el procedimiento de gestión y control financiero para garantizar la eficacia y eficiencia en el empleo de los fondos públicos.

Así, en base al art. 28.1, que atribuye a la Comunidad Autónoma de Galicia la competencia de desarrollo legislativo y ejecución en lo relativo al régimen jurídico de su Administración, se aprueba la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia. Esta ley se divide en 5 Títulos, integrados por 68 artículos, 8 disposiciones adicionales, 3 transitorias 1 derogatoria y 1 final.

#### 1.1. El ámbito de aplicación objetivo y subjetivo de la Ley

La subvención se concibe como una de las medidas más importantes que utiliza la Administración Pública para el fomento de determinadas actividades por los particulares orientadas hacia fines considerados de interés general.

La ley establece que su ámbito objetivo de aplicación es la regulación del régimen jurídico de las subvenciones, entendiendo como tal: “toda disposición dineraria realizada por la Administración de la Comunidad Autónoma, o por una entidad vinculada o dependiente de ella, a favor de personas públicas o privadas, y que cumpla los siguientes requisitos:

- a) Que no haya una contraprestación directa de los beneficiarios. Es la diferencia sustancial con los contratos, donde la Administración, a cambio del precio, recibe una prestación. En las subvenciones no recibe nada a cambio.
- b) El cumplimiento de un objetivo, la ejecución de un proyecto, la realización de una actividad, un comportamiento, que concurra una situación y además que el beneficiario cumpla una serie de obligaciones materiales pero también formales. Es decir, no es una entrega incondicionada, sino que obliga al beneficiario al cumplimiento de una serie de obligaciones, es el mecanismo para fomentar la consecución de ciertos objetivos.
- c) Que el proyecto, la acción, la conducta o la situación financiada tenga por objeto el fomento de una actividad de utilidad pública o interés social o la promoción de una finalidad pública. Esto es lo que legitima la utilización de fondos públicos. Además esta función o finalidad pública debe estar comprendida en el ámbito competencial de la Administración que concede la subvención.

También hace una delimitación negativa, al no considerar como subvención prestaciones asistenciales y de seguridad social, beneficios fiscales, aportaciones para la financiación indiferenciada de entidades del sector público, premios sin solicitud previa del beneficiario y las subvenciones a partidos políticos y grupos parlamentarios.

Por su parte los créditos a particulares y las subvenciones a los intereses se regirán por la normativa específica y supletoriamente por esta ley.

El ámbito de aplicación subjetivo está constituido por la Administración General de la Comunidad Autónoma de Galicia, las Entidades Locales de Galicia y las entidades públicas instrumentales vinculadas o dependientes de estas (organismos autónomos, entidades públicas empresariales, agencias y consorcios).

Los otros entes instrumentales, sociedades mercantiles y fundaciones, quedan sometidas a los principios de gestión y de información.

## 1.2. El elemento subjetivo: Administración concedente, beneficiarios y entidades colaboradoras

La subvención es un negocio jurídico que necesita de la participación de dos personas y que en ocasiones cuenta con una tercera:

- a) **La Administración:** el otorgamiento de una subvención exige que el órgano concedente tenga competencia para ello. En la Comunidad Autónoma de Galicia esta le corresponde a los consejeros, presidentes o directores de los organismos autónomos y los órganos rectores de los demás entes.

No obstante, requiere autorización del Consello de la Xunta la concesión de subvenciones que superen la cuantía de 3.000.000 euros por beneficiario. La autorización no implicará la aprobación del gasto, que corresponderá en todo caso al órgano competente para la concesión de la subvención. Esta competencia es susceptible de desconcentración y delegación.

- b) **El beneficiario:** será la persona que percibe la subvención y a cambio debe cumplir con una serie de obligaciones materiales y formales. El concepto de beneficiario es muy amplio e incluye a personas físicas o jurídicas, agrupaciones, comunidades de bienes y unidades económicas o patrimonios carentes de personalidad jurídica.

Esta persona debe realizar la actividad o encontrarse en la situación que legitima la concesión. No podrán ser beneficiarias las personas que hayan sido sancionadas con carácter firme, en vía penal o administrativa, con la pérdida del derecho a obtener subvenciones o ayudas, o que por su situación económica o personal no se considere adecuado reconocerle tal derecho (incompatibilidad, declaración o solicitud de concurso, intervención, no estar al corriente con la Hacienda Pública o la Seguridad Social, etc.).

Sus obligaciones van mucho más allá de realizar la actividad o adoptar el comportamiento exigido. Incluye justificar su realización, someterse a actuaciones de comprobación, comunicar la obtención de otras subvenciones, acreditar la regularidad de su situación tributaria y con la Seguridad Social, la llevanza de contabilidad, conservar los documentos justificativos, difundir la subvención obtenida y reintegrarla en caso de incumplimiento o invalidez.

La normativa reguladora de la subvención puede exigir un importe de financiación propia, la cual debe ser acreditada.

- c) **Entidades colaboradoras:** son aquellas que actúan en nombre y por cuenta del órgano concedente y que se encargan de entregar y distribuir los fondos públicos a los beneficiarios, o colabore en la gestión de la subvención. Estos fondos en ningún caso se considerarán integrantes de su patrimonio. La Xunta actúa como entidad colaboradora cuando tenga atribuida estas funciones respecto de las subvenciones sujetas al derecho comunitario. Los requisitos son similares a los de los beneficiarios y sus obligaciones incluyen entregar a estos los fondos recibidos, comprobar los requisitos para el otorgamiento y la realización de la actividad, justificar la entrega de los fondos, entregar la justificación presenta por los beneficiarios y someterse a las actuaciones de comprobación.

Para actuar como entidad colaboradora es necesario formalizar un convenio de colaboración con el órgano concedente donde se recojan las condiciones y obligaciones asumidas. En caso de celebrarse con entidades privadas estas serán seleccionadas previo procedimiento sometido a los principios de publicidad, concurrencia, igualdad y no discriminación. Si por el objeto de la colaboración se considerara un servicio se deberá celebrar un contrato en los términos fijados en la normativa sobre contratación pública.

### 1.3. Los procedimientos de concesión de subvenciones

La racionalización del gasto público y el cumplimiento de las directrices de política presupuestaria exigen la aprobación de un plan estratégico, de carácter programático, al cual se ajustarán la totalidad de las subvenciones que tengan previsto convocar la Consellería y los organismos y entidades dependientes o vinculadas a ella. En él se concretará los objetivos, efectos, plazos para su consecución, costes y fuentes de financiación.

Como requisito para la concesión de una subvención la Administración previamente ha de tramitar un procedimiento administrativo. La Ley de Subvenciones regula dos distintos:

### 1.3.1. Concurrencia competitiva

Es el procedimiento ordinario de concesión, consiste en la comparación entre las solicitudes presentadas estableciendo una prelación en base a los criterios de valoración fijados en las bases reguladoras. Se puede excepcionar de fijar la prelación cuando no sea necesario realizar la comparación de solicitudes, concediendo las subvenciones hasta el agotamiento del crédito. Excepcionalmente, cuando así lo establezcan las bases, el órgano concedente podrá acordar el prorrateo del importe máximo entre los beneficiarios.

El procedimiento se inicia de oficio, mediante la convocatoria pública aprobada por el órgano competente. En ella se indican los datos más relevantes del proceso: disposición por la que se aprueban las bases y el diario oficial en que se publicaron; el crédito presupuestario; objeto, condiciones y finalidad; régimen de concesión; requisitos; órganos competentes; plazos para la presentación de solicitudes, resolución y justificación; criterios de concesión; etc.

Dentro del plazo indicado los interesados presentarán su solicitud, acompañada de los documentos requeridos, y autorizarán al órgano gestor a obtener certificados de las entidades tributarias y de Seguridad Social correspondientes. Se podrá prever la sustitución de esta documentación por una responsable, en este caso, antes de la propuesta de resolución se requerirá la presentación de la misma en un plazo no superior a 15 días.

La instrucción del procedimiento le corresponderá al órgano gestor indicado en la convocatoria, que podrá solicitar cuantos informes sean necesarios o estime convenientes, y procederá a la evaluación de las solicitudes, emitiendo un informe con el resultado de esa valoración. Sobre esta formulará propuesta de resolución provisional, la cual será comunicada a los interesados concediéndoles un plazo de 10 días para la presentación de alegaciones. Se podrá prescindir de este trámite cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por los interesados. En este caso, la propuesta de resolución formulada tendrá el carácter de definitiva.

Vistas las alegaciones se emitirá propuesta de resolución definitiva, la cual se notificará a los solicitantes propuestos como beneficiarios únicamente cuando las bases reguladoras lo establezcan como obligatorio. Estas propuestas no crean derecho alguno a favor de la persona propuesta.

Aprobada la propuesta definitiva el órgano competente resolverá el procedimiento de manera motivada. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución no podrá sobrepasar los 9 meses a partir de la publicación de la convocatoria, salvo que una norma con rango de ley o comunitaria establezca otro. Vencido el plazo sin notificación expresa se entiende desestimada por silencio administrativo.

La resolución será notificada a los interesados, que dispondrán de un plazo de 10 días para su aceptación, transcurrido el cual sin manifestación expresa se entiende aceptada tácitamente.

La subvención será publicada en el DOGA, indicando los datos de la misma, beneficiario, cuantía y finalidad, salvo que sean nominativas, vengan impuestas por una norma con rango de ley, puedan vulnerar el derecho al honor y la intimidad personal o familiar, o que individualmente tengan una cuantía inferior a 3.000 euros, en este caso se publicarán en la página web del concedente. Las ayudas concedidas serán inscritas en el Registro de Ayudas, Subvenciones y Convenios de la Consellería de Hacienda.

El procedimiento se podrá tramitar de manera abreviada, prescindiendo de la evaluación, cuando el órgano instructor se limite a comprobar la concurrencia de los requisitos para la concesión de la subvención.

### 1.3.2. Concesión directa

Podrán concederse de forma directa las siguientes subvenciones:

- a) Las previstas nominativamente en los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma.
- b) Aquéllas cuyo otorgamiento o cuantía vengan impuestas a la administración por una norma de rango legal.
- c) Excepcionalmente, aquellas otras subvenciones en que se acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública.

Las subvenciones nominativas se instrumentarán, normalmente, mediante convenios. Las propuestas de acuerdo o resolución de concesión, o el instrumento del convenio que se autorice a suscribir, se ajustarán a la ley de subvenciones, salvo en lo que afecte a la aplicación de los principios de publicidad y concurrencia.

La concesión directa de subvenciones por importe superior a 150.000 euros, o lo que determinen las leyes anuales de presupuestos, requerirá la autorización previa del Consello de la Xunta de Galicia.

### 1.4. Gestión y justificación de la subvención

Las entidades del Sector público encargadas de gestionar las subvenciones lo harán de acuerdo con los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación, eficacia en el cumplimiento de los objetivos y eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.

El beneficiario asume la obligación de ejecutar la actividad o cumplir el objetivo establecido en la misma, esto lo puede hacer con sus propios medios y recursos o puede subcontratar con terceros la ejecución total o parcial de la actividad que constituya el objeto de la subvención, siempre y cuando la normativa reguladora así lo prevea. La actividad subcontratada no sobrepasará el porcentaje que se fije en las bases reguladoras. En el supuesto de que no figure previsión alguna, el beneficiario podrá subcontratar hasta un porcentaje que no sobrepase del 50% del importe de la actividad subvencionada.

Cuando la actividad concertada con terceros sobrepase del 20% del importe de la subvención y dicho importe sea superior a 60.000 euros, la subcontratación se debe celebrar por escrito, previa autorización de la entidad concedente.

Una vez ejecutada la actividad se debe presentar la documentación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los objetivos previstos en el acto de concesión. Esto se podrá hacer mediante una cuenta justificativa del gasto, o por módulos o mediante la presentación de estados contables.

Salvo que las bases reguladoras dispongan otra cosa, la cuenta justificativa incluirá la declaración de las actividades realizadas y su coste, desglosando cada uno de los gastos, y acreditándolos con facturas o documentos equivalentes. Se presentará en el plazo máximo de 3 meses desde la finalización del plazo para la realización de la actividad.

En las subvenciones concedidas a otras administraciones públicas o entidades vinculadas y a las universidades, la justificación se podrá hacer mediante una certificación de la intervención.

En las ayudas y subvenciones con cargo a créditos financiados con recursos de la Unión Europea, se deberá justificar:

- a) El gasto, mediante facturas o documentos contables de valor probatorio equivalente.
- b) El pago, con los justificantes de las transferencias bancarias o documentos acreditativos.

Sin perjuicio de la admisibilidad de la justificación mediante fórmulas de costes simplificados. En el supuesto de adquisición de bienes inmuebles debe aportarse certificado de tasador independiente.

Las subvenciones que se concedan en atención a la concurrencia de una determinada situación en el perceptor no requerirán otra justificación que la acreditación por cualquier medio admisible en derecho de dicha situación previamente a la concesión.

El incumplimiento de la obligación de justificación de la subvención o la justificación insuficiente de la misma llevará consigo el reintegro de la misma.



La justificación debe incluir, únicamente, los gastos subvencionables, esto es aquéllos que de manera indudable respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada y se realicen en el plazo establecido por las bases reguladoras. En ningún caso su coste de adquisición podrá ser superior al valor de mercado.

Cuando el gasto subvencionable supere las cuantías establecidas para contratos menores (obras de importe igual o superior a 50.000 euros y el resto de gastos por importe igual o superior a 18.000 euros, sin IVA) el beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, salvo que no exista en el mercado suficiente número de entidades o que el gasto se hubiera realizado con anterioridad a la solicitud de la subvención.

Si el objeto de la subvención es la adquisición, construcción, rehabilitación y mejora de bienes inventariables estos deberán destinarse al fin concreto para el cual se concedió durante el plazo establecido en las bases reguladoras, que no podrá ser inferior a cinco años en caso de bienes inscribibles en un registro público, ni a dos años para el resto de bienes. El incumplimiento de esta obligación será causa de reintegro, salvo que haya sido autorizada por la Administración concedente. En ningún caso serán gastos subvencionables los intereses deudores de las cuentas bancarias, los intereses, recargos y sanciones administrativas y penales y los gastos de procedimientos judiciales.

Los tributos son gasto subvencionable cuando el beneficiario los abona efectivamente. No se consideran subvencionables los impuestos indirectos cuando sean susceptibles de recuperación o compensación ni los impuestos personales sobre la renta.

Los costes indirectos formarán parte de la justificación de la subvención, siempre que las bases reguladoras así lo prevean, siempre que se hubieran imputado por el beneficiario a la actividad subvencionada en la parte que razonablemente corresponda de acuerdo con principios y normas de contabilidad generalmente admitidas y, en todo caso, en la medida en que tales costes correspondan al periodo en que efectivamente se realiza la actividad.

Una vez presentada la justificación el órgano concedente o, en su nombre, la entidad colaboradora, comprobará la adecuada justificación de la subvención, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad.

En las subvenciones de capital superiores a 60.000 euros, destinadas a inversiones en activos tangibles, será requisito imprescindible la comprobación material de la inversión, formalizando un acta de conformidad firmada por el representante de la administración y por el beneficiario. Excepcionalmente, la comprobación material se podrá sustituir por una justificación documental.

## 1.5. El procedimiento de gestión presupuestaria

La concesión de subvenciones es una de las principales modalidades de gasto público, por lo que la tramitación del procedimiento de concesión y gestión de la subvención conlleva la ejecución del presupuesto de gastos del órgano concedente. Esto hace que la regulación financiera sea de aplicación a todo el proceso. El art. 6 de la ley establece como requisitos para el otorgamiento de una subvención, **entre otros**, la existencia de crédito adecuado y suficiente, la fiscalización previa del gasto y la aprobación del mismo por el órgano competente.

El procedimiento de gestión presupuestaria se desarrolla de la siguiente manera:

### a) Aprobación del gasto (Doc. A): antes de la convocatoria o la concesión de la misma.

Durante la tramitación del expediente previo si se solicita el certificado de crédito adecuado y suficiente a la Oficina de contabilidad esta procede a la Retención del Crédito (Doc. RC), vinculándolo así la realización de los gastos derivados de la concesión de la subvención.

Si por razón del importe (subvenciones > 3.000.000 euros por beneficiario o > 150.000 euros en concesión directa) sea precisa la autorización del Consello de la Xunta, esta se recabará antes de la aprobación del gasto.

Completado el expediente, antes de su aprobación se someterá a fiscalización previa por parte de la Intervención Delegada.

### b) Compromiso o disposición del gasto (Doc. D): con la resolución de concesión de la subvención.

En caso de subvenciones nominativas se podrá acumular la aprobación y el compromiso en un documento contable mixto (Doc. AD).

### c) Reconocimiento y propuesta de pago (Doc. OK): tras la justificación de la realización de la actividad, proyecto, objetivo o adopción del comportamiento para el cual se concedió.

La falta de justificación o la existencia de alguna causa de reintegro suponen la pérdida del derecho al cobro total o parcial. Cuando la naturaleza de la subvención así lo justifique, podrán realizarse pagos a cuenta mediante pagos fraccionados que responderán al ritmo de ejecución de las acciones subvencionadas, abonándose por cuantía equivalente a la justificación presentada.

### d) Orden de pago (Doc. P): una vez recibida por el ordenador de pago la propuesta se ordenará el pago a la Unidad de Tesorería.

### e) Pago material: por los servicios de tesorería según las normas propias.

No podrá realizarse el pago mientras el beneficiario no se encuentre al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social o tenga pendiente de pago alguna otra deuda con la Administración pública de la Comunidad Autónoma o sea deudor por resolución de procedencia de reintegro. Las normas reguladoras podrán establecer un régimen simplificado de acreditación de estas circunstancias para subvenciones otorgadas a entidades del sector público autonómico o local, Universidades, becas, las que indique la ley de presupuestos generales, las subvenciones corrientes (Cap. IV) o de capital (Cap. VII) a familias e instituciones sin ánimo de lucro (en el caso de transferencias de capital no pueden superar individualmente los 3.000 euros), las establecidas por Orden de la Consellería de Hacienda o las destinadas a proyectos o programas de



acción social y cooperación internacional. Se podrán hacer pagos anticipados, considerados pagos a justificar, excepto a beneficiarios en concurso, salvo que esté vigente un convenio, insolventes, intervenidos judicialmente o inhabilitados según la Ley Concursal.

Podrán tramitarse y concederse subvenciones por tramitación anticipada y también con carácter plurianual, en los términos establecidos en la normativa financiera.

## 1.6. El reintegro de las subvenciones

El órgano competente para la concesión de la subvención será también el competente para exigir el reintegro de la misma en los siguientes supuestos:

**a) Invalidez de la resolución de concesión:** para ello deberá procederse a la revisión de oficio del acto mediante:

- Declaración de nulidad: por alguna de las circunstancias establecidas en la Ley de Procedimiento Administrativo o se carezca de crédito adecuado y suficiente (art. 57 Decreto Legislativo 1/1999, 7 de octubre).
- Declaración de lesividad: por apreciar alguna infracción al ordenamiento jurídico, particularmente a las normas de la Ley de Subvenciones de Galicia. Declarada la lesividad según la Ley de Procedimiento Administrativo se procederá a su impugnación ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

**b) Incumplimiento de los requisitos para obtener la subvención o de las obligaciones del beneficiario.** En este caso el órgano competente iniciará de oficio el procedimiento de reintegro, el acuerdo se adoptará por iniciativa propia, orden del superior, petición razonada, denuncia o a consecuencia del informe de la Intervención General de la Comunidad Autónoma (IGCA) al realizar el control financiero. Se dará audiencia al interesado y se resolverá y notificará en el plazo máximo de 12 meses. Esta resolución pondrá fin a la vía administrativa.

Acordado el inicio del mismo se podrá acordar como medida cautelar, de manera motivada, la suspensión de los pagos pendientes de realizar.

La obligación de reintegro puede ser total o parcial. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de derecho público y devengan el interés de demora, que será el interés legal del dinero incrementado en un 25%, salvo que la Ley de Presupuestos Generales del Estado, o la normativa de la Unión Europea, establezca otro distinto.

El derecho de la Administración a reconocer o liquidar el reintegro prescribe a los 4 años.

Quedan obligados al reintegro los beneficiarios y las entidades colaboradoras que hayan incumplido sus obligaciones. En los patrimonios o unidades económicas sin personalidad jurídica la responsabilidad se exige de manera solidaria a sus miembros. En la misma situación están los miembros asociados del beneficiario que se comprometan a efectuar la totalidad o parte de las actividades que fundamentan la concesión de la subvención en nombre y por cuenta de la persona jurídica beneficiaria.

En el caso de las sociedades o entidades disueltas y liquidadas responden solidariamente los socios o partícipes hasta el límite del valor de la cuota de liquidación adjudicada.

Responden subsidiariamente los administradores de las sociedades mercantiles, o aquéllos que ostenten la representación legal de otras personas jurídicas, que no hubieran realizado los actos necesarios que fueran de su incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones infringidas, adoptaran acuerdos que hicieran posibles los incumplimientos o consintieran los de quienes de ellos dependan. Igualmente los que ostenten la representación legal de las personas jurídicas que hayan cesado en sus actividades.

En el caso de fallecimiento del obligado, la obligación se transmitirá “mortis causa” a sus causahabientes, sin perjuicio de la aceptación de la herencia a beneficio de inventario.

### 1.7. El control financiero de las subvenciones

El control financiero de las subvenciones se ejercerá por la Intervención General de la Comunidad Autónoma (IGCA), sin perjuicio de las competencias de los órganos externos de control o de los órganos de otras Administraciones interesadas. Este control recaerá sobre:

- a) Las subvenciones de la Unión Europea percibidas por la Administración de la Comunidad Autónoma de Galicia o los organismos o entidades vinculadas o dependientes de ella.
- b) Los beneficiarios y, en su caso, entidades colaboradoras por las subvenciones otorgadas por la Comunidad Autónoma de Galicia y organismos o entidades vinculadas o dependientes de aquélla con cargo a los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Galicia o a los fondos de la Unión Europea.

El control financiero de subvenciones de la Unión Europea llevará a cabo un control de legalidad para comprobar el cumplimiento de la normativa comunitaria y realizará controles y verificaciones de los procedimientos de gestión de los distintos órganos gestores que intervengan en la concesión, gestión y pago.

El control financiero de subvenciones tendrá como objeto verificar cualquier aspecto de la actividad subvencionada, desde la adecuada y correcta obtención de la subvención hasta las cuestiones relativas a la realización de la actividad, su justificación, la del gasto y el pago, así como el cumplimiento de las obligaciones de gestión.

Para ello se podrá examinar documentación, registros contables, realizar comprobaciones materiales, y en general cualquier otra que se considere necesaria en atención a las características especiales de las actividades subvencionadas.

Este control financiero podrá extenderse a terceras personas a las que se encuentren asociados los beneficiarios, así como a cualquier otra susceptible de prestar un interés en la consecución de los objetivos, realización de las actividades, ejecución de los proyectos o adopción de los comportamientos.

Los beneficiarios, las entidades colaboradoras y los terceros relacionados con el objeto de la subvención o su justificación tienen el deber de prestar colaboración y facilitar cuanta documentación sea requerida, en el ejercicio de las funciones de control a la IGCA. La negativa u obstrucción puede constituir causa de reintegro sin perjuicio de las sanciones que, en su caso, pudieran corresponder.

En el ejercicio del control financiero, el funcionario encargado de realizar el mismo por la IGCA será considerado agente de la autoridad. El personal deberá guardar la confidencialidad y el secreto respecto de los asuntos que conozcan por razón de su trabajo.

El ejercicio del control financiero de subvenciones se adecuará al plan anual de auditorías y sus modificaciones, debidamente motivadas, que apruebe anualmente la Intervención General de la Comunidad Autónoma. No será necesario incluir en el plan de auditorías las comprobaciones precisas que soliciten otros estados miembros en aplicación de reglamentos comunitarios sobre beneficiarios perceptores de fondos comunitarios.

El procedimiento de control financiero se ajusta a las siguientes normas:

- a) **Iniciación de las actuaciones:** mediante su notificación a los órganos, organismos o entidades objeto de control y a los beneficiarios y, en su caso, entidades colaboradoras.
- b) **Suspensión del procedimiento:** cuando se encuentren circunstancias que puedan originar la devolución por causas distintas a las del reintegro la IGCA las comunicará al órgano concedente, pudiendo acordar la suspensión del control.  
Esta suspensión se levantará cuando el órgano concedente haya adoptado las medidas oportunas o haya transcurrido 3 meses sin que se comunique la adopción de medida alguna.
- c) **Adopción de medidas cautelares:** cuando haya indicios de irregularidades en la obtención, destino o justificación la IGCA podrá acordar las medidas cautelares precisas para impedir la desaparición, destrucción o alteración de las facturas, documentos equivalentes o sustitutivos y de cualquier otro documento.
- d) **Informe provisional:** el órgano que efectúe el control deberá emitir un informe escrito recogiendo los hechos puestos de manifiesto y sus conclusiones.
- e) **Remisión y alegaciones:** este informe tendrá carácter provisional y se remitirá al órgano gestor y al beneficiario o entidad colaboradora al fin de que puedan formular durante un plazo de 15 días las alegaciones oportunas.
- f) **Informe definitivo:** transcurrido el plazo anterior se emitirá el informe definitivo, el cual incluirá las alegaciones recibidas, así como las observaciones del órgano de control sobre éstas. El informe definitivo será remitido al órgano gestor y al beneficiario o entidad colaboradora.  
Si no se recibieron alegaciones, el informe provisional se elevará a definitivo.

- g) **Finalización de las actuaciones:** las actuaciones de control financiero sobre beneficiarios y, en su caso, entidades colaboradoras habrán de concluir en el plazo máximo de 12 meses a contar desde la fecha de notificación a aquéllos del inicio de las mismas. Dicho plazo podrá ser ampliado en actuaciones que revistan especial complejidad, si el beneficiario o la entidad colaboradora ocultaron información o documentación esencial o en el caso de subvenciones de la UE.

Las actuaciones de control financiero se documentarán en:

- a) **Diligencias:** para reflejar hechos relevantes que se pongan de manifiesto en el ejercicio del mismo.
- b) **Informes:** en los que se constatan las conclusiones de la actuación de control. Los informes serán notificados a los beneficiarios o a las entidades colaboradoras objeto de control. Una copia del informe será remitido al órgano gestor que concedió la subvención y se señalará, en su caso, la necesidad de iniciar expedientes de reintegro y sancionador.

Ambos tendrán naturaleza de documentos públicos y harán prueba de los hechos que motiven su formalización, salvo que se acredite lo contrario.

Cuando el informe de la IGCA recoja la procedencia de reintegrar la totalidad o parte de la subvención, el órgano gestor deberá comunicar a la IGCA en el plazo de 1 mes a partir de la recepción del informe de control financiero:

- a) La incoación del expediente de reintegro, notificándolo así al beneficiario o entidad colaboradora.
- b) La discrepancia con su incoación, que habrá de ser motivada. En este caso, la IGCA podrá emitir informe de actuación dirigido al órgano gestor.

Durante el mes siguiente al fin de cada trimestre, el órgano gestor informará a la IGCA de las actuaciones realizadas durante el trimestre respecto a los procedimientos iniciados, así como a aquéllos que en ese periodo fueran terminados.

Si en los informes se ponen de manifiesto otras conclusiones o recomendaciones no constitutivas de irregularidad, el órgano gestor deberá comunicar con periodicidad cuatrimestral las actividades desarrolladas en relación con las mismas.

## 1.8. Infracciones y sanciones

Son infracciones administrativas en materia de subvenciones las acciones y omisiones tipificadas en la Ley de Subvenciones de Galicia y serán sancionables incluso a título de simple negligencia.

Serán responsables de las infracciones administrativas:

- a) Los beneficiarios de subvenciones.
- b) Las entidades colaboradoras.

- c) El representante legal de los beneficiarios de subvenciones que carezcan de capacidad de obrar.
- d) Las personas o entidades relacionadas con el objeto de la subvención o su justificación obligadas a prestar colaboración y a facilitar cuanta documentación sea requerida.

No se exige esta responsabilidad a personas que carezcan de capacidad de obrar, en caso de fuerza mayor o en aquellos caso en los que derive de una decisión colectiva para quienes hubieran salvado su voto o no hubieran asistido a la reunión en la que se tomó aquélla.

La exigencia de responsabilidad administrativa es incompatible con la responsabilidad penal por los mismos hechos, por lo cual en caso de apreciar indicios de delito la Administración pasará el tanto de culpa al Ministerio Fiscal y se abstendrá de seguir con el procedimiento hasta que finalice el proceso penal. De no estimarse la existencia de delito, la administración iniciará o continuará el expediente sancionador en base a los hechos que los tribunales hayan considerado probados. La pena impuesta por la autoridad judicial excluirá la imposición de sanción administrativa si se le impuso al mismo sujeto por los mismos hechos e idéntico fundamento a los tenidos en cuenta en el procedimiento sancionador.

**Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves.**

Las infracciones en materia de subvenciones se sancionarán mediante la imposición de:

**a) Sanciones pecuniarias:** la multa pecuniaria será independiente de la obligación de reintegro, así como de las indemnizaciones por daños y perjuicios que pudieran exigirse. Para su cobro resultará igualmente de aplicación el régimen jurídico previsto para los ingresos de derecho público. Pueden consistir en una:

- Multa fija: estará comprendida entre 75 y 6.000 euros.
- Multa proporcional: que se aplicará sobre la cantidad indebidamente obtenida, aplicada o no justificada y puede alcanzar el triple de esa cantidad.

**b) Sanciones no pecuniarias:** se podrán imponer en caso de infracciones graves o muy graves, podrán consistir en:

- Pérdida durante un plazo de hasta 5 años de la posibilidad de obtener subvenciones, ayudas públicas y avales de las administraciones públicas u otros entes públicos.
- Pérdida durante un plazo de hasta 5 años de la posibilidad de actuar como entidad colaboradora en relación con las subvenciones reguladas en la presente ley.
- Prohibición durante un plazo de hasta 5 años para contratar con las administraciones públicas (art. 60.2.c) Real Decreto Legislativo 3/2011).

Las sanciones se graduarán atendiendo en cada caso concreto a:

- a) La comisión repetida de infracciones en materia de subvenciones: comisión de una infracción, grave o muy grave, de la misma naturaleza en los 4 años anteriores.
- b) La resistencia, negativa u obstrucción a las actuaciones de comprobación y control.
- c) La utilización de medios fraudulentos en la comisión de infracciones en materia de subvenciones.
- d) La ocultación a la administración, mediante la falta de presentación de la documentación justificativa o la presentación de documentación incompleta, incorrecta o inexacta.
- e) El retraso en el cumplimiento de las obligaciones formales, solo para infracciones leves.

Los criterios de graduación son aplicables simultáneamente. No podrán utilizarse para agravar una infracción cuando estén contenidos en la conducta infractora o formen parte del ilícito administrativo.

El importe de las sanciones a un mismo infractor está limitado:

- a) En sanciones leves: límite el importe de la subvención inicialmente concedida.
- b) Sanciones graves: el triple del importe de la cantidad indebidamente obtenida, aplicada o no justificada.

La cuantía de estas sanciones será:

- a) Por cada infracción leve: entre los 75 euros y los 6.000 euros.
- b) Por cada infracción grave: una multa proporcional del tanto al doble de la cantidad indebidamente obtenida, aplicada o no justificada.

Cuando el importe del perjuicio económico represente más del 50% de la subvención concedida y excediera de 30.000 euros, concurriendo resistencia a las actuaciones de control o utilización de medios fraudulentos, los infractores podrán ser sancionados, además, con la pérdida durante un plazo de hasta 3 años de la posibilidad de:

- Obtener subvenciones, ayudas públicas y avales de la administración u otros entes públicos.
- Celebrar contratos con la administración u otros entes públicos.
- Actuar como entidad colaboradora

- c) Por las infracciones muy graves: una multa proporcional del tanto al triple de la cantidad indebidamente obtenida, aplicada o no justificada.

Cuando el importe del perjuicio económico represente más del 50% de la subvención concedida y excediera de 30.000 euros, concurriendo resistencia a las actuaciones de control o utilización de medios fraudulentos, los infractores podrán ser sancionados, además, con la pérdida durante un plazo de hasta 5 años de la posibilidad de:



- Obtener subvenciones, ayudas públicas y avales de la administración u otros entes públicos.
- Celebrar contratos con la administración u otros entes públicos.
- Actuar como entidad colaboradora

Las infracciones prescribirán en el plazo de 4 años a contar desde el día en el que la infracción se hubiera cometido. Las sanciones prescribirán en el plazo de 4 años a contar desde el día siguiente a aquél en que hubiera adquirido firmeza la resolución por la que se impuso la sanción.

Competencia para acordar la imposición de sanciones:

**a) Consello de la Xunta:**

- Subvenciones autorizadas por el Consello.
- Sanciones que impliquen la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones, ayudas públicas y avales, la prohibición para celebrar contratos con la Comunidad Autónoma o en la pérdida de la posibilidad de actuar como entidad colaboradora.

**b) Titular del Departamento:**

- Sobre las subvenciones concedidas por la Consellería.
- Subvenciones concedidas por entidades adscritas a ella.

Las resoluciones sancionadoras impuestas por **infracciones graves o muy graves** que hubieran ganado firmeza en la vía administrativa:

- a) Se publicarán en el Diario Oficial de Galicia.
- b) Se comunicarán a los registros de subvenciones y de contratistas de la Administración de la Comunidad Autónoma.
- c) Se recogerán en el Registro Público de Sanciones.

La imposición de las sanciones se efectuará mediante expediente administrativo en el que, en todo caso, se dará audiencia al interesado, según las normas de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. El procedimiento se iniciará de oficio, como consecuencia de la actuación de comprobación, así como de las actuaciones de control financiero. Los acuerdos de imposición de sanciones pondrán fin a la vía administrativa.

La responsabilidad derivada de las infracciones se extingue por el pago o cumplimiento de la sanción o por prescripción o por fallecimiento.

Responderán solidariamente de la sanción pecuniaria los miembros, partícipes o cotitulares de las entidades.

Responderán subsidiariamente de la sanción pecuniaria los administradores de las sociedades mercantiles, o aquellos que ostenten la representación legal de otras personas jurídicas, de acuerdo con las disposiciones legales o estatutarias que les resulten de aplicación, que no realicen los actos necesarios que sean de su incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones infringidas, adopten acuerdos que hagan posibles los incumplimientos o consientan los de quienes de ellos dependan.

En el caso de sociedades o entidades disueltas y liquidadas en las que la ley limita la responsabilidad patrimonial de los socios, partícipes o cotitulares, las sanciones pendientes se transmitirán a éstos, que quedarán obligados solidariamente hasta el límite del valor de la cuota de liquidación que se les hubiera adjudicado o se les hubiera debido adjudicar. En el caso de sociedades o entidades disueltas y liquidadas en las que la ley no limita la responsabilidad patrimonial de los socios, partícipes o cotitulares, las sanciones pendientes se transmitirán a éstos, que quedarán obligados solidariamente a su cumplimiento.